

Este Juzgado, considerando: Que está justificado por el informe del ciudadano Gobernador, que la detencion de Joaquín L. Guevara excedida de tres dias sin que se justifique con el auto motivado correspondiente; con fundamento de los artículos 10, 101 y 102 de la Constitucion federal, se lialla con las proposiciones siguientes:

1ª La justicia de la Union ampara y protege al ciudadano Joaquín L. de Guevara contra el acto del ciudadano Gobernador de este Estado, que lo ha mantenido en detencion mas de tres dias.

2ª Notifíquese esta sentencia á quienes corresponda, publíquese en los periódicos y descuenta con este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El ciudadano Juez 3º suplente de Distrito lo sentenció y firmó. (Firmados.)—*T. Bonilla.*—*G. y Gallegos.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero treinta de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco, por el ciudadano Joaquín Ladron de Guevara, contra el ciudadano Gobernador del Estado, que por mantenerlo en prision mas de tres dias infringiendo la garantía á que se refiere el artículo 19 de la Constitucion general, y considerando: que del expediente aparece que la detencion del quejoso ha excedido de tres dias, sin haberse dictado el auto motivado de prision; por lo expuesto y en virtud de lo que previene el artículo 101 de la Constitucion general, se decreta: Que se confirma el auto pronunciado por el Juez de Distrito de Jalisco, el 20 de Diciembre último, declarando: que la justicia de la Union ampara y protege á Joaquín Ladron de Guevara, contra el acto de la autoridad que lo ha mantenido en prision mas de tres dias.

Devuelvándose sus actuaciones al Juez de Distrito de Jalisco, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—(firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogasón.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

México, Febrero nueve de mil ochocientos setenta y uno. Son copias.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido por el C. Francisco Diego contra los actos del tesorero general del Estado de Yucatan que le cobra derechos por el tabaco y azúcar que importó del Estado de Tabasco, siendo dicho cobro de conformidad con los decretos locales de 24 de Marzo y 7 de Julio de 1858.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

Resuelto el punto sobre suspension inmediata que del cobro que la tesorería general de este Estado hacia el ciudadano Francisco Diego del 10 por ciento de derechos, solicitó al promover el recurso de amparo contra ese acto, debe ahora el Fiscal emitir su pedimento sobre lo principal de la solicitud del quejoso. El informe que á esto respecto ha evacuado el ciudadano tesorero, no solo está fundado en razones que convencen de la justicia del cobro que hace al ciudadano Diego de ese derecho con-

tra el cual reclama, sino que viene comprobado con documentos que demuestran jurídicamente que iguales productos de este Estado, es decir, tabaco y azúcar introducidos por la vía de Sisal, han causado el mismo impuesto, que ha sido satisfecho por los importadores, conforme al decreto local de 9 de Julio de 1868. Para que pudiera padecer, pues, el vicio de inconstitucionalidad que le atribuye el quejoso, ora preciso que justificase, que solo por ser de otros Estados de la República los efectos á que se refiere, han quedado sujetos al pago de dicho diez por ciento de que están libres los mismos frutos de este Estado; pero lejos de haber rendido esa prueba, tenemos la contraria en los certificados que el ciudadano tesorero ha anexado á su informe. Si la fracción 9ª del artículo 72 del pacto federal, faculta al Soberano Congreso de la Union para impedir, por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado se establezcan restricciones onerosas; y si en virtud de esta facultad expidió el supremo decreto de 1º de Mayo de 1868, prohibiendo, que bajo ninguna denominacion pueda uno imponer á los frutos de otro Estado mayores contribuciones que las que exija á los suyos propios, ha distado mucho, sin duda, ese precepto constitucional de querer que los productos del suelo de un Estado paguen contribuciones de que se hayan exentos en todo ó en parte los de otros Estados. Y este desequilibrio ruinoso para la industria de Yucatan, esta desigualdad, injusta para las importaciones de los productos de ella por la vía de Sisal, seria, sin embargo, la que se vendria á establecer concediendo al ciudadano Francisco Diego la dispensacion del pago de los derechos del 10 por ciento sobre el valor del tabaco y azúcar que ha introducido con procedencia nacional, cuando estamos palpando en vista de los adjuntos certificados, que iguales efectos producidos en "Cosumel y San Felipe," poblaciones pertenecientes á este Estado, han sido traídos á esta ciudad por la carretera de Sisal, y ha

causado el mismo impuesto que el ciudadano Francisco Diego se resiste á pagar. Faltando con este motivo la razon de inconstitucionalidad que atribuye al decreto local de 9 de Julio de 1868, conforme al que se le hace el cobro del repetido 10 por ciento, falta tambien la razon del amparo que invoca contra los actos del ciudadano tesorero en el presente juicio, porque no existe la invasion de la esfera de la autoridad federal que supone cometida, trayendo por fundamento de su ocurso la fracción 3ª del artículo 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869. En este concepto, el Fiscal concluye y pide: que vd. declare sin lugar el amparo que solicita el expresado D. Francisco Diego contra los actos del ciudadano tesorero general del Estado, que le cobra el 10 por ciento de derechos por la importacion de noventa y ocho tercios de tabaco en rama y cinco de azúcar, de procedencia nacional; y sin lugar, así mismo, respecto del medio por ciento de patente de giro y medio por ciento de consumo á que tambien ha querido hacer extensivo este recurso, no obstante que ha omitido citar el mas leve fundamento en apoyo de este último extremo de su solicitud.

Mérida, Diciembre diez de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Prudencio Ill-juelos.*

Sentencia del Juzgado de Distrito.

Juzgado de Distrito de Yucatan. Mérida Enero diez de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por el ciudadano Francisco Diego, de este comercio, contra actos del ciudadano tesorero general del Estado que le cobra el 10 por ciento, derechos de importacion, el medio por ciento de patente de giros y el medio por ciento de consumo por noventa y ocho tercios tabaco en rama que recibió de Tabasco por la canoa "Victoria," anclada en Sisal el 8 de Noviembre próximo pasa-

do; y cinco tercios azúcar quebrada procedente del mismo Estado, por la canoa «Amalia,» fondeada en Sisal el 6 del mismo mes; cobro que verifica conforme á las leyes locales de 24 de Marzo de 1868 y de 30 de Marzo de 1868, y órden superior de 20 de Octubre de 1856, invadiendo las atribuciones federales: el auto en que se niega la suspension del acto reclamado; lo pedido por el ciudadano fiscal en lo principal; el informe de la autoridad contra quien se pide; las pruebas rendidas; lo alegado por las partes; la citacion para sentencia; y considerando: que el artículo 1º de la ley local de 24 de Marzo de 1868, dice: «Los efectos nacionales introducidos en el Estado, pagarán á su importacion el 10 por ciento sobre los aforos de la tarifa siguiente:» que en esta se encuentran los efectos de que se trata en este juicio: que el tenor literal de la ley de 10 de Julio del mismo año, es este: «Se aprueba en todas sus partes el decreto de 24 de Marzo último, y para obsequiar el del Soberano Congreso de la Union, de 1º de Mayo del presente, se hace extensivo el pago de derechos que impone aun á los productos del Estado comprendidos en él, que se dirijan á los mercados interiores por la vía de Sisal:» que el 10 por ciento de importacion aplicado á los efectos nacionales, no se puede hacer extensivo legalmente á los frutos del Estado, porque no puede llamarse importacion la traslacion de sus efectos de un punto á otro y sin salir de su territorio, para que puedan hallarse en la misma condicion que los nacionales, esto es, los de los otros Estados: que ademas, si los frutos del Estado pagaran el 10 por ciento, fallaria la razon de la ley de 24 de Marzo, la misma que sirve á la de 10 de Julio, expresada en la parte expositiva de la primera, puesto que no se favorecería la agricultura de los pueblos fronterizos; y la ley que no tiene razon, deja de ser: que de aquí se infero, que aunque se diga que hasta los frutos del Estado deben pagar el diez por ciento, no es legal, porque en esto se estralimitó el legislador y salió fuera del círculo

de su accion, imponiendo á dichos frutos la carga que no pensó gravitase sobre ellos, sino sobre los de los otros Estados, siendo menos perjudicial que ni estos ni aquellos lo paguen, porque de esta manera se procede en el sentido mas liberal, no solo para el comercio, sino tambien para la agricultura local: que si los frutos del Estado de que tratan las certificaciones del administrador subalterno de rentas del Estado, acumuladas en autos han pagado tales derechos, ha sido por voluntad de sus propietarios; pero esos hechos no quitan que la ley sea anticonstitucional: que demostrada la ilegalidad con que se cobra el 10 por ciento á los frutos del Estado, el quejoso se halla comprendido en este juicio en la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion de 12 de Noviembre de 1868, acerca del amparo pedido por el C. Lic. Rodolfo G. Canton, sobre los mismos derechos por importacion de efectos nacionales que hizo de Campeche, amparado en dicha ejecutoria con fundamento de la fraccion 9ª, art. 72 de la Constitucion federal y ley suprema de 2 de Mayo del referido año de 1868, en cuanto al 10 por ciento de importacion, pero no en cuanto al medio por ciento de patente de giros y el medio por ciento de derechos de consumo, establecidos conforme al artículo 117 de la Constitucion federal de la República.

Por estos legales fundamentos, la autoridad en nombre de los supremos poderes de la Union, decreta:

Primero: La justicia de la Nacion ampara y protege al ciudadano Francisco Diego, contra los actos del ciudadano tesorero general del Estado que le cobra el diez por ciento de derechos de importacion de efectos nacionales.

Segundo: No lo ampara ni protege en cuanto al medio por ciento de patente de giros y el medio por ciento de derechos de consumo.

Tercero: Sáquese testimonio de este fallo para su publicacion, y remítanse los autos originales á la Suprema Corte de Justicia

de la Nacion, de conformidad con los artículos 13 y 27 de la ley suprema de 20 de Enero de 1869.

Notifíquese.—(Firmados.)—*I. Manzanilla.*—*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

México Febrero tres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Francisco Diego ante el Juzgado de Distrito de Yucatán, contra los actos del C. Tesorero general del Estado, en virtud de los cuales se cobran al quejoso diez por ciento de derechos de importacion, medio por ciento de patente de giros y medio por ciento de consumo por noventa y ocho tercios de tabaco en rama que recibió de Tabasco por canoa «Victoria,» anclada en Sisal el 8 de Noviembre último, y por cinco tercios azucar quebrada, procedente del mismo Estado por canoa «Amelia» fondeada en Sisal el 7 del mismo mes, cobro que hace conforme á la ley de 24 de Marzo de 1868, 30 de Marzo de 868 y Orden superior de 30 de Octubre de 1856, invadiéndose las atribuciones federales segun se expresa el quejoso; y considerando que el 10 por ciento sobre importacion establecido en el Estado de Yucatan por la Orden de 30 de Octubre de 1856, y por los decretos de 30 de Marzo de 1863, está dispuesta por disposiciones particulares del Estado, sobre efectos introducidos de otros Estados, asignándoles un derecho distinto del que causan iguales productos del Estado de Yucatan. Que la 2ª parte de la fraccion 7ª del artículo 72 de la Constitucion federal, dá al Congreso de la Union la facultad de impedir, por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado se establezcan restricciones onerosas. Que, por lo mismo, el Congreso General es el que tiene facultad para impedir por medio de bases generales que un

Estado grave los productos de otro mas que los suyos propios, porque tal gravámen es una restriccion onerosa á los productos de otro Estado. Que esto es lo que precisamente determina la ley federal de 2 de Mayo de 1868, al ordenar que ningun Estado pueda imponer, bajo ninguna denominacion, á los frutos de los otros Estados mayores contribuciones que las que exige á sus propios frutos. Que esa determinacion debe de ser observada, á pesar de las disposiciones en contrario de las leyes del Estado de Yucatán, porque el artículo 126 de la Constitucion general dispone: que las leyes del Congreso de la Union, que emanen de la Constitucion, serán la ley suprema de toda la Union, y que los juces de cada Estado se arreglen á ellas, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones ó leyes de los Estados. Que por lo mismo, la disposicion del Estado de Yucatan que impone el 10 por ciento sobre importaciones, es directamente contraria á la ley federal. Considerando, ademas, respecto de medio por ciento de patente de giros y el medio por ciento de consumo, que el Estado de Yucatan ha usado de su derecho al imponerlo, porque no le está prohibido por las leyes generales.

En virtud de las razones y fundamentos legales expuestos, se declara: que se confirma la sentencia pronunciada el 10 de Enero último por el Juez de Distrito de Yucatan que declara, en primer lugar, que la Justicia Federal ampara y protege al C. Francisco Diego, contra los actos del C. Tesorero general del Estado de Yucatan, que le cobra el 10 por ciento por derechos de importacion de efectos nacionales; y en segundo lugar, que no lo ampara ni protege en cuanto al cobro del medio por ciento de patente de giro, y el medio por ciento de derechos de consumo.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de Yucatan, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decreta-

ron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. — (Firmados.) — *S. Lerdo de Tejada.*—*P. Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Orizaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Leon Guzman.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Febrero nueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta,* oficial mayor.

COMPETENCIA

Entre los ciudadanos Juez 5º de lo Civil de esta Capital y el de 1ª instancia de Orizava, para conocer del juicio promovido por la Municipalidad de Maltrata contra los herederos de D. Joaquín Pesado, sobre propiedad de un terreno de la Hacienda del Encinal.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

El Fiscal dice: Que segun aparezco de las constancias que se tienen á la vista, el dia 9 de Junio de 1869 el Síndico de la Municipalidad de Maltrata, Estado de Veracruz, se presentó ante el Juzgado de 1ª instancia de Orizava, demandando al dueño de la hacienda del Encinal, que lo es la testamentaria del Sr. D. Joaquín Pesado, la restitucion de un terreno anexo á ella, y conocido con el nombre de Tlaxomulco: el demandado, representado á su vez por el ciudadano Juan Gutierrez, declinó desde luego la jurisdiccion del Juez de Orizava, alegando: que la testamentaria demandada estaba radicada en México, y los albaceas domiciliados aquí tambien. Esta circuns-

tancia dió origen á la presente controversia de jurisdiccion suscitada entre el referido Juez y el 5º de lo civil de esta capital; la que entablada en la forma legal, ha venido al conocimiento de esta Corte Suprema, para que en uso de sus atribuciones se sirva dirimirla.

El Juzgado 5º de lo Civil de esta capital, funda su jurisdiccion en la ley 32 tit. 2º Partida 3ª y en las doctrinas de varios tratadistas, que enseñan: que el fuero del domicilio es el mas preferente, y que el de la ubicacion de la cosa, solo tiene lugar en el caso de que allí se encuentre el demandado en el momento de ponerle la demanda.

A su vez, el Juzgado de Orizava hace consistir su competencia: 1º en que el Código de procedimientos del Estado, en la fraccion 1ª del artículo 14, tiene determinado que las demandas en que se ejercitan acciones reales sobre bienes inmuebles, correspondan al Juez del lugar en que estos estén situados: 2º En que la Municipalidad de Maltrata ejerce tales acciones contra los herederos de Pesado, por un rancho que se halla situado á inmediaciones del pueblo de Maltrata dentro de los límites que forman el canton en que dicho Juzgado de Orizava ejerce sus atribuciones: 3º Que segun el artículo 2,481 del Código de Veracruz, quedaron derogadas todas las leyes y costumbres antiguas, infiriendo de ahí que no deben tener ningun valor las que sean contrarias á lo que dicho Código dispone; y que en consecuencia, por mas respetables que sean los fundamentos en que se apoya su competidor, estos no deben considerarse en el Estado sino como opiniones, pero nunca como preceptos legales.

Como se vé, pues, se vuelve á tocar la cuestion sobre si las leyes locales de un Estado, deben ser obligatorias para los vecinos de otros. Cuestion que esta respectable Sala, con la ilustracion que la caracteriza, ha decidido de una manera enteramente satisfactoria, y cuya resolucion ha venido á importar nada menos la incoluminidad del pacto federal.